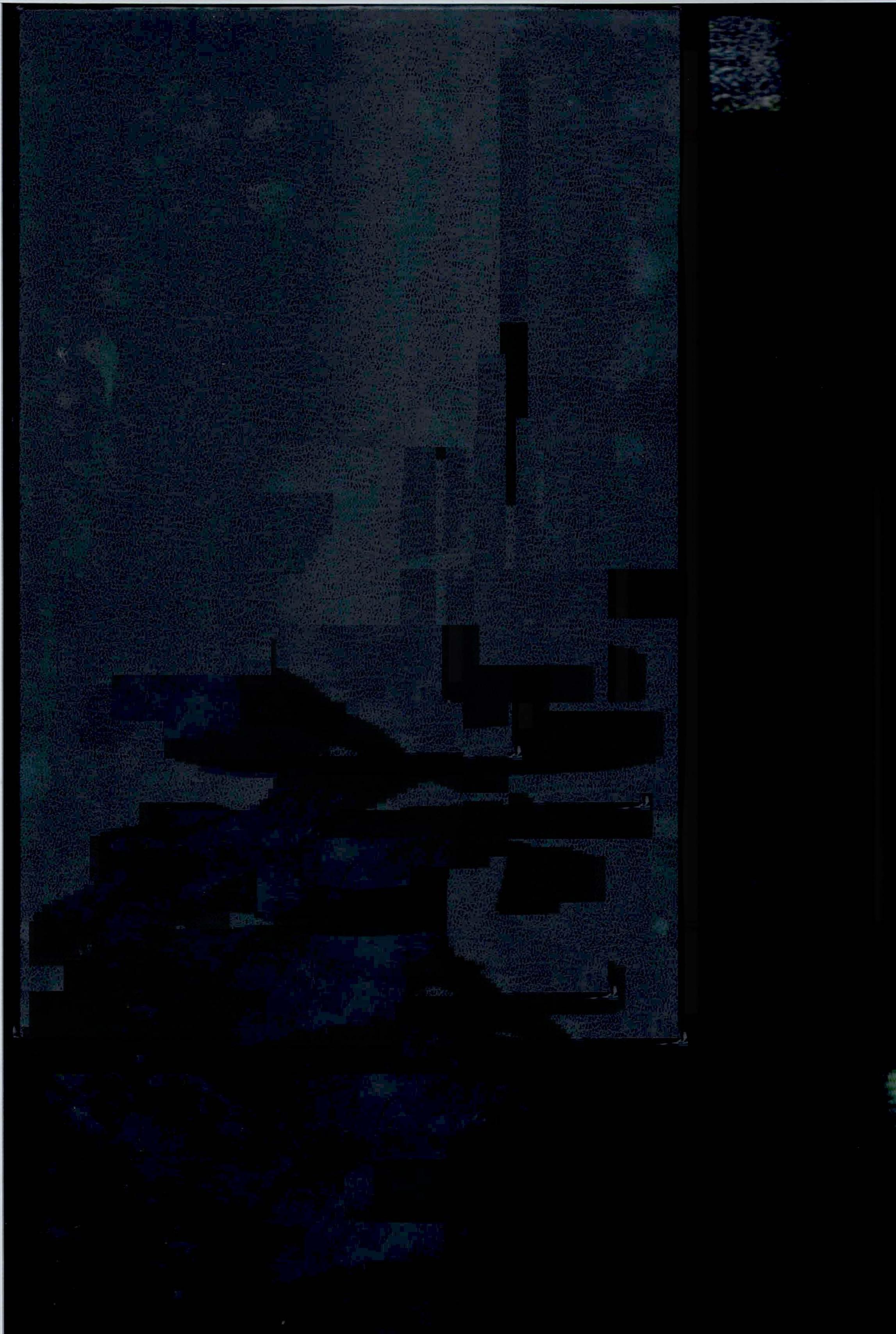


**Acuerdo sobre
Medio Ambiente
Canadá – Perú**



ACUERDO SOBRE MEDIO AMBIENTE

ENTRE

CANADÁ

Y

LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CANADÁ Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, en adelante llamados las “Partes”,

RECORDANDO su decisión en el *Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú* de implementar el Tratado de manera consecuente con la conservación y protección ambiental y uso sostenible de sus recursos y dentro de ese campo:

- (a) mejorar y aplicar las leyes y reglamentos ambientales;
- (b) fortalecer la cooperación en materia ambiental; y
- (c) promover el desarrollo sostenible;

CONVENCIDOS de la importancia de la conservación, protección y mejora del medio ambiente en sus territorios y del rol esencial de la cooperación en esas áreas para alcanzar el desarrollo sostenible para el bienestar de las generaciones presentes y futuras;

RECONOCIENDO el crecimiento de los vínculos económicos, ambientales y sociales entre sus países mediante la creación de un área de libre comercio;

RECORDANDO que las Partes comparten el compromiso de adoptar políticas que promuevan el desarrollo sostenible y las sanas prácticas ambientales; y

RECONOCIENDO la importancia de la transparencia y de la participación del Pùblico en la elaboración de leyes y políticas ambientales y con respecto a la gobernabilidad ambiental;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Sección I - Derechos y Obligaciones Ambientales

Artículo 1: Definiciones

Para los propósitos de este Acuerdo:

“legislación ambiental” significa toda ley o reglamento, o una disposición contenida en éstos, de una Parte, cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana mediante:

- (a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o emisión de contaminantes ambientales;

- (b) el control de sustancias o productos químicos, otras sustancias, materiales o desechos tóxicos o peligrosos para el medio ambiente, y la difusión de información relacionada con ellos; o
- (c) la conservación de la diversidad biológica que incluye la protección de la flora y fauna silvestres, especies amenazadas, su hábitat y las áreas naturales bajo protección especial en el territorio de la Parte y que, en el caso de la República del Perú, también incluye el uso sostenible de la diversidad biológica;

pero sin incluir ninguna ley o regulación ni ninguna disposición contenida en ellas relacionada directamente con la salud de los trabajadores y la seguridad y salud pública.

Para mayor claridad, el término “ley ambiental” no incluye ninguna ley ni regulación ni ninguna disposición incluida en éstas, cuya finalidad principal sea regir la cosecha comercial o la explotación o la cosecha de subsistencia o la cosecha por parte de indígenas de los recursos naturales;

“comunidades indígenas y locales” significa, para la República del Perú, aquellas comunidades indígenas, afroamericanas y locales que se definen en el artículo 1 de la Decisión Andina como un grupo cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que está regido total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones o por una legislación especial y que, cualquiera sea su situación jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, culturales y políticas o una parte de ellas;

“persona” significa una persona natural, o una persona jurídica tales como una empresa o una organización no gubernamental establecida según las leyes de una Parte;

“provincia” significa una provincia de Canadá e incluye el Territorio del Yukón, los Territorios del Noroeste y Nunavut;

“ley” o “regulación” significa:

- (a) Para Canadá, una ley o regulación o una disposición de éstas, incluso instrumentos jurídicamente obligatorios hechos en virtud de las mismas, promulgada o hecha o dictada a nivel federal de gobierno y por cualquiera de las provincias incluidas en una declaración entregada por Canadá en virtud del Anexo II.
- (b) Para la República del Perú, toda ley promulgada por el Congreso de la República, o decretos o resoluciones promulgados por el Nivel central del gobierno con el fin de implementar leyes del Congreso, que sean ejecutadas por el Nivel central del gobierno;

“territorio” significa:

- (a) Con respecto a Canadá,
 - (i) el espacio terrestre, espacio aéreo, las aguas jurisdiccionales y mar territorial;
 - (ii) la zona económica exclusiva de Canadá, de acuerdo a lo establecido al respecto en la legislación nacional, y consecuente con la Parte V de la *Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar* (CONVEMAR) del 10 de diciembre de 1982; y

- (iii) la plataforma continental de Canadá, de acuerdo a lo establecido por la legislación nacional, y consecuente con la Parte VI de la CONVEMAR;
- (b) Con respecto a la República del Perú, el territorio continental, las islas, las zonas marinas y el espacio aéreo sobre ellas, en las cuales la República del Perú ejerce soberanía o derechos soberanos y jurisdicción, de acuerdo con su legislación nacional y el derecho internacional.

Artículo 2: Disposiciones Generales

1. Reconociendo el derecho soberano de cada una de las Partes de establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades de desarrollo ambiental y de adoptar o modificar por consiguiente sus leyes y políticas ambientales, cada Parte se asegurará de que sus políticas y leyes ambientales establezcan altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir desarrollando y mejorando esas leyes y políticas.
2. En consecuencia y con el objeto de alcanzar altos niveles de protección ambiental, cada Parte deberá observar y hacer cumplir su legislación ambiental a través de la acción gubernamental y sus leyes ambientales.
3. Para los fines de este Acuerdo, una Parte no ha dejado de cumplir su legislación ambiental en un caso particular cuando la acción o inacción en cuestión por entidades o funcionarios de esa Parte:
 - (a) refleje un razonable ejercicio de discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, de procesamiento o de regulación u observancia; o

- (b) derive de decisiones tomadas de buena fe con el fin de asignar recursos destinados a la fiscalización de otros asuntos ambientales a los que se les haya asignado una mayor prioridad.
4. Ninguna Parte promoverá el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de los niveles de protección contemplados en su legislación ambiental. Por lo tanto, ninguna de las Partes dejará de aplicar ni derogará de algún modo su legislación ambiental de forma tal que debilite o reduzca las protecciones concedidas en dichas leyes de manera tal que promueva el comercio o la inversión.
5. Cada Parte se asegurará de mantener procedimientos apropiados para evaluar los impactos ambientales, de conformidad con las leyes y políticas nacionales, de proyectos y planes propuestos, que puedan causar efectos adversos significativos en el ambiente, con miras a evitar o minimizar tales efectos adversos.
6. Las Partes alentarán la promoción del comercio de bienes y servicios ambientales así como la inversión en este campo.
7. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación ambiental en el territorio de la otra Parte.
8. Las Partes afirman la importancia del *Convenio sobre la Diversidad Biológica* hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Convenio sobre la diversidad biológica) y acuerdan trabajar en forma conjunta para avanzar en los objetivos de ese Convenio.

9. Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de afectar los derechos y obligaciones existentes de cada Parte en virtud de otros acuerdos ambientales internacionales de los cuales dicha Parte sea Parte.

Artículo 3: Disponibilidad de Procedimientos y Normas Procesales

1. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos judiciales, cuasi-judiciales o administrativos se encuentren disponibles para sancionar o reparar infracciones a su legislación ambiental.

2. Cada Parte se asegurará que las personas interesadas que residan o estén establecidas en el territorio de esa Parte puedan solicitar a las autoridades competentes de la Parte que investiguen supuestas violaciones de su legislación ambiental y deberán dar a tales solicitudes la debida consideración de acuerdo con su legislación.

3. Cada Parte se asegurará de que las personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación sobre un determinado asunto cubierto por este Acuerdo tengan acceso apropiado a los procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos para el cumplimiento de la legislación ambiental de la Parte y a las reparaciones por violaciones a esa ley.

4. Cada Parte se asegurará de que los procedimientos en los párrafos 1 y 3 del Artículo 3 sean justos, equitativos y transparentes, cumplan con el debido proceso y estén abiertos al público, salvo que la administración de justicia requiera algo distinto.

5. Cada Parte se asegurará de que las partes en los procedimientos tengan el derecho de apoyar o defender sus respectivas posiciones y de presentar

información o pruebas, y de que la decisión se base en dicha información o pruebas.

6. Cada Parte se asegurará de que las decisiones finales sobre los fundamentos jurídicos en dichos procesos se hagan por escrito, preferiblemente establezcan las razones sobre las cuales se basan las decisiones y estén disponibles a las partes de los procesos sin demoras indebidas y, de acuerdo con su legislación, al Público.

7. Cada Parte deberá además establecer, según proceda, que las partes en tales procesos tengan el derecho, de acuerdo con su legislación, a pedir, cuando sea justificado, la revisión y corrección o redeterminación de las decisiones finales en tales procesos.

8. Cada Parte se asegurará de que los tribunales que realicen o revisen dichos procesos sean imparciales e independientes y no tengan ningún interés substancial en el resultado del asunto.

Artículo 4: Información y Participación del Público

1. Cada Parte promoverá el conocimiento público de sus leyes ambientales, asegurándose que la información está disponible al público en materia de leyes y procedimientos para su aplicación y cumplimiento, así como procedimientos para que las personas interesadas soliciten a las autoridades competentes de la Parte investigar presuntas violaciones de sus leyes ambientales.

2. Cada Parte se asegurará de que sus leyes, regulaciones y disposiciones administrativas de aplicación general con respecto a cualquier asunto cubierto por este Acuerdo sean prontamente publicadas o estén de otra forma disponibles en tal forma que las personas interesadas puedan conocerlas.

3. De acuerdo con sus leyes y políticas internas, cada Parte se asegurará de que sus procedimientos de evaluación ambiental contemplen el revelar información al público acerca de planes y proyectos propuestos sujetos a evaluación y deberá permitir la participación del público en tales procedimientos.
4. Cualquier persona u organización no gubernamental que resida o esté establecida en el territorio de alguna de las Partes podrá presentar una solicitud por escrito a cualquier Parte, a través de su Coordinador Nacional, indicando que la pregunta está relacionada con las obligaciones de esa Parte en virtud de este Acuerdo. Dicho Coordinador Nacional recibirá, registrará y cuando la pregunta esté dirigida a la otra Parte, remitirá la pregunta al otro Coordinador Nacional.
5. La Parte a la que se dirija la pregunta deberá acusar recibo de la pregunta por escrito y dará una respuesta de manera oportuna a la persona y entregará una copia al Coordinador Nacional de la otra Parte.
6. Cada Parte deberá hacer públicamente disponible de manera oportuna las preguntas y respuestas e informará anualmente respecto a esas preguntas y respuestas.
7. Las Partes informarán al público de las actividades, incluyendo las reuniones de las Partes y las actividades de cooperación, que desarrollen para implementar este Acuerdo.
8. Las Partes se esforzarán por involucrar al Público en las actividades que realicen para implementar este Acuerdo.
9. Las Partes se esforzarán por cooperar para fortalecer la participación del público en todos los asuntos relacionados con la implementación de este Acuerdo.

Artículo 5: Diversidad Biológica

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica para alcanzar su desarrollo sostenible y reiteran su compromiso de promover y fomentar dicha conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
2. Las Partes también reiteran su compromiso, según lo establecido por el *Convenio de Diversidad Biológica*, de respetar, preservar y mantener el conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que contribuyen a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, sujetos a su legislación nacional.
3. Las Partes reiteran sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales y reconocen su autoridad y obligaciones según lo establecido por el *Convenio de Diversidad Biológica* con respecto al acceso a recursos genéticos, y la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de esos recursos genéticos.
4. Las Partes también reconocen la importancia de la participación y la consulta del público, según se establezca en su legislación nacional, en asuntos relativos a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
5. Las Partes acuerdan cooperar en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica dentro del marco jurídico establecido en la Sección II de este Acuerdo.

6. Las Partes tratarán de cooperar a fin de intercambiar información pertinente respecto de:
- (a) la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica;
 - (b) evitar el acceso ilegal a recursos genéticos, conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales; y
 - (c) intercambiar en forma equitativa los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y conocimientos, innovaciones y prácticas conexos.

Artículo 6: Responsabilidad Social Corporativa

Reconociendo los beneficios substanciales que traen el comercio y la inversión internacional, las Partes alentarán prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas dentro de sus territorios o jurisdicciones, para fortalecer la coherencia entre los objetivos económicos y sociales.

Sección II - Cooperación Ambiental

Artículo 7: Cooperación

1. Las Partes reconocen que la cooperación es una forma efectiva de alcanzar los objetivos de este Acuerdo y reafirman su compromiso de desarrollar

programas de cooperación y actividades para promover el cumplimiento de estos objetivos.

2. Las Partes también se esforzarán por fortalecer su cooperación en temas ambientales en los diversos foros bilaterales, regionales y multilaterales en los que participen.

3. En el desarrollo de los programas de cooperación, las Partes podrán involucrar actores interesados o cualquier otra entidad como las Partes estimen apropiado.

4. Las Partes acuerdan identificar áreas prioritarias para las actividades de cooperación y establecer un programa de trabajo que deberá ser preparado inmediatamente después de la entrada en vigor de este Acuerdo. Las áreas prioritarias incluidas en el Anexo 1 de este Acuerdo deberán ser consideradas para el programa inicial de trabajo.

5. Las Partes acuerdan hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar los recursos apropiados a fin de implementar un Programa de Trabajo eficaz. El Programa de Trabajo se podrá implementar:

- (a) a través de programas de cooperación técnica bajo cualquier modalidad que convengan las Partes, tales como compartir información, intercambio de expertos y capacitación; y / o
- (b) por medio de cooperación financiera para proyectos prioritarios presentados por las Partes.

Los recursos podrán provenir de entidades o agencias públicas de las Partes, o, según sea apropiado, de instituciones privadas, fundaciones u organizaciones públicas internacionales.

6. Las Partes podrán cooperar con cualquier Estado que no sea parte de este Acuerdo, según sea apropiado, a fin de maximizar los recursos disponibles. Cuando proceda, las Partes acuerdan cooperar para identificar y asegurar recursos de fuentes externas.
7. Las Partes acuerdan que el Público debe ser informado de las actividades cooperativas realizadas en el marco de este Acuerdo y participe según sea apropiado.
8. Las Partes deberán reunirse a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Acuerdo y subsecuentemente se reunirán como lo acuerden mutuamente, para revisar el progreso en la implementación de este acuerdo. Tales reuniones serán organizadas por los Coordinadores Nacionales.

Sección III - Disposiciones Institucionales

Artículo 8: Administración del Acuerdo

1. Las Partes establecen un Comité del Medio Ambiente compuesto por representantes de cada una de las Partes.
2. El Comité estudiará y discutirá el progreso en la implementación de este Acuerdo.

3. El Comité se reunirá, por primera vez, dentro de un plazo de un año después de la entrada en vigor de este Acuerdo y posteriormente con la frecuencia fijada por acuerdo mutuo.

4. El Comité hará un acta resumida de las reuniones a menos que se decida algo diferente y redactará informes sobre las actividades relacionadas con la implementación de este Acuerdo cuando lo considere conveniente. Tales informes pueden tratar, entre otras cosas:

- (a) medidas tomadas por cada Parte además de las obligaciones contraídas en virtud de este Acuerdo; y
- (b) actividades de cooperación realizadas en virtud de este Acuerdo.

5. Las actas resumidas y los informes se darán a conocer al público, a menos que las Partes decidan lo contrario.

Artículo 9: Coordinador Nacional

Cada parte designará un Coordinador Nacional dentro del Ministerio u organismo apropiado que servirá como punto oficial de contacto. Las Partes se informarán a través de notas diplomáticas respecto a tales nombramientos y pondrán dicha información a disposición del público.

Artículo 10: Revisión

1. Dentro del año siguiente al quinto año después de la entrada en vigor de este Acuerdo, las Partes considerarán adelantar una revisión de la implementación

de este Acuerdo con miras a mejorar su funcionamiento y efectividad. Las Partes podrán acordar otras revisiones ulteriores.

2. La Comisión podrá acordar la participación del público en el proceso de revisión.

3. Como parte de esta revisión, el Comité podrá considerar desarrollos adicionales con respecto a este Acuerdo y podrá presentar recomendaciones a las Partes para su consideración y acción según sea apropiado

4. Las Partes darán a conocer al público los resultados de toda revisión importante.

Artículo 11: Intercambio de Información

Una Parte deberá proporcionar prontamente cualquier información relacionada con cualquier medida de la otra Parte, previo recibo de una solicitud por escrito de esa otra Parte.

Artículo 12: Solución de Diferencias

1. Las Partes deberán en todo momento esforzarse por acordar acerca de la interpretación y aplicación de este Acuerdo.

2. Las Partes harán todo el esfuerzo, a través de consultas y el intercambio de información, con un énfasis particular en cooperación, por atender cualquier asunto que pueda afectar la interpretación y aplicación de este Acuerdo.

3. Cualquiera de las Partes puede solicitar consultas a la otra Parte relacionadas con cualquier asunto que surja en virtud de este Acuerdo, mediante el envío de una solicitud por escrito a los Coordinadores Nacionales que la otra Parte haya designado.

4. Si las Partes no resolvieren el asunto a través de los Coordinadores Nacionales, una Parte podrá solicitar por escrito consultas de las cuales se encargará:

(a) Por Canadá, el Ministro del Medio Ambiente;

(b) Por la República del Perú, el Ministro del Medio Ambiente;

o sus delegados o sucesodres.

El propósito de las consultas será buscar una solución de mutuo acuerdo sobre la materia.

5. La Parte que fuere objeto de la solicitud responderá en forma expedita. Las consultas comenzarán dentro del plazo de treinta días después de recibirse la solicitud por escrito, a menos que las Partes acuerden algo diferente.

6. Ninguna de las Partes dará lugar en su legislación al derecho de demandar a la otra Parte sobre la base de que la otra Parte hubiere actuado en forma inconsecuente con este Acuerdo.

Artículo 13: Aplicación a las Provincias

La aplicación de este Acuerdo a las Provincias de Canadá esta sujeta al anexo II.

Artículo 14: Anexos

Los anexos de este Acuerdo forman parte integral de este Acuerdo.

Artículo 15: Protección de la Información

Nada en este Acuerdo se interpretará en el sentido de requerir a una Parte el revelar información que de otra forma estaría prohibida o exenta de divulgación bajo sus leyes y regulaciones, incluyendo aquellas concernientes al acceso a la información y privacidad.

Artículo 16: Enmiendas

Las Partes podrán acordar por escrito cualquier modificación o adición a este acuerdo, incluyendo sus Anexos. Tales modificaciones o adiciones deberán entrar en vigor en tal fecha o fechas como fueran acordadas entre las Partes y constituirán parte integral de este acuerdo.

Artículo 17: Denuncia

1. Este acuerdo puede terminar por el mutuo consentimiento por escrito de las Partes y en tales condiciones y dentro de los plazos que hayan sido acordados de común acuerdo.

2. En el evento de la terminación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú cada Parte puede unilateralmente notificar por escrito con sesenta días de anticipación su intención de abandonar el acuerdo.

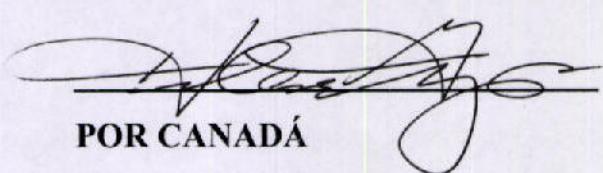
Artículo 18: Entrada en Vigor

Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito sobre la finalización de los procedimientos internos exigidos para la entrada en vigor de este Acuerdo.

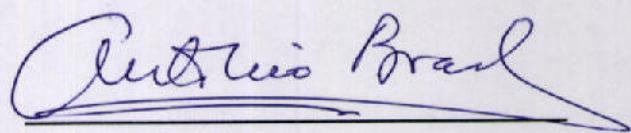
Este acuerdo entrará en vigor a partir de la segunda de esas notificaciones o en la fecha en que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, la fecha que sea posterior.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado este acuerdo.

HECHO en duplicado en Lima, el día 29 de mayo de 2008, en los idiomas español, inglés y francés, siendo cada versión igualmente auténtica.



POR CANADÁ



POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Anexo I

Áreas Prioritarias para Cooperación

Las áreas prioritarias identificadas por la República del Perú para consideración del Programa de Trabajo inicial incluyen, entre otras:

- (a) Gestión del riesgo ambiental;
- (b) Manejo integral del recurso hídrico;
- (c) Conservación in situ y ex situ de la biodiversidad;
- (d) Uso sostenible de los recursos naturales;
- (e) Restauración de ecosistemas degradados;
- (f) Fomento a la producción y comercio de bienes y servicios favorables para el medio ambiente;
- (g) Prevención, gestión y control de la contaminación del aire, del agua y de suelos;
- (h) Gestión integral de residuos sólidos;
- (i) Gestión integral de contaminantes químicos y desechos peligrosos;
- (j) Sistematización de la información ambiental;
- (k) Educación ambiental y participación ciudadana;

- (l) Fortalecimiento de las instituciones nacionales incluyendo:
 - (i) el programa de vigilancia de los recursos naturales vivos;
 - (ii) Sistema de información de los recursos naturales vivos;
 - (iii) Sistema de información sobre el medio ambiente;
 - (iv) Programa de vigilancia para observar y rastrear los recursos genéticos;
 - (v) Sistema de observación y alerta de organismos genéticamente modificados;
- (m) Armonización y racionalización de la gestión del conocimiento y gestión de la información incluidos los ecosistemas desérticos costeros y los ecosistemas de pastizales andinos;
- (n) Ordenación forestal; y
- (o) Uso y desarrollo de tecnologías menos contaminantes.

Anexo II

Aplicación a las Provincias de Canadá

1. Una vez que entre en vigor este Acuerdo, Canadá proporcionará a la República del Perú una declaración escrita en la cual indicará las Provincias por las cuales Canadá estará obligado con respecto a los asuntos dentro de su jurisdicción. La declaración tendrá efecto desde el momento en que se entregue a la República del Perú.
2. Canadá hará todos los esfuerzos a su alcance para que este Acuerdo sea aplicable al mayor número posible de provincias.
3. Canadá notificará a la República del Perú con seis meses de anticipación sobre cualquier modificación a su declaración.

AGREEMENT ON THE ENVIRONMENT

BETWEEN

CANADA

AND

THE REPUBLIC OF PERU

CANADA AND THE REPUBLIC OF PERU, hereinafter referred to as the “Parties”:

RECALLING their resolve in the *Free Trade Agreement between Canada and the Republic of Peru* to implement that Agreement in a manner that is consistent with environmental protection and conservation, and the sustainable use of their resources, and within that area to:

- (a) enhance and enforce environmental laws and regulations;
- (b) strengthen cooperation on environmental matters; and
- (c) promote sustainable development;

CONVINCED of the importance of the conservation, protection and enhancement of the environment in their territories and of the essential role of cooperation in these areas for achieving sustainable development for the well-being of present and future generations;

ACKNOWLEDGING the growing economic, environmental and social links between their countries through the creation of a free trade area;

RECALLING the Parties' commitment to pursue policies that promote sustainable development and sound environmental management; and

ACKNOWLEDGING the importance of transparency and public participation in the development of environmental laws and policies and with respect to environmental governance;

AGREE AS FOLLOWS:

Section I – Environmental Rights and Obligations

Article 1: Definitions

For purposes of this Agreement:

"environment law" means any statute or regulation, or provision thereof, of a Party, including legally binding instruments made pursuant to the above, the primary purpose of which is the protection of the environment, or the prevention of a danger to human life or health, through:

- (a) the prevention, abatement or control of the release, discharge, or emission of pollutants or environmental contaminants;

- (b) the control of environmentally hazardous or toxic chemicals, substances, materials and wastes, and the dissemination of information related thereto; or
- (c) the conservation of biological diversity, which includes the protection of wild flora or wildlife, endangered species and their habitat, and specially protected natural areas in the Party's territory and for the Republic of Peru which also includes the sustainable use of biological diversity;

but does not include any statute or regulation, or any provision thereof, directly related to worker health and safety or public health.

For greater clarity the term “environmental law” does not include any statute or regulation, or provision thereof, of which the primary purpose is managing the commercial harvest or exploitation, or subsistence or aboriginal harvesting, of natural resources;

“indigenous and local communities” means, for the Republic of Peru, those Native, Indigenous, Afro-American and local communities which are defined in Article 1 of Andean Decision 391 as a human group whose social, cultural and economic conditions distinguish it from other sectors of the national community, that is governed totally or partially by its own customs or traditions or by special legislation and that, irrespective of its legal status, conserves its own social, economic, cultural and political institutions or a part of them;

“person” means a natural person, or a legal person such as an enterprise or non-governmental organization incorporated pursuant to the laws of a Party;

“province” means a province of Canada, and includes the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut;

“statute” or “regulation” means:

- (a) for Canada: a statute or regulation or provision thereof, including legally binding instruments made pursuant to the above, enacted, made or issued at the federal level of government and by any province listed in a declaration provided by Canada under Annex II;
- (b) for the Republic of Peru: a law of Congress, or Decree or Resolution promulgated by the central level of government to implement a law of Congress, that is enforceable by action of the Central Level of government;

“territory” means:

- (a) with respect to Canada,
 - (i) the land territory, air space, internal waters and territorial sea;
 - (ii) the exclusive economic zone of Canada, as determined by its domestic law, consistent with Part V of the *United Nations Convention on the Law of the Sea* of 10 December 1982 (UNCLOS); and
 - (iii) the continental shelf of Canada, as determined by its domestic law, consistent with Part VI of UNCLOS;

- (b) with respect to the Republic of Peru, the mainland territory, the islands, the maritime zones and the air space above them, over which the Republic of Peru exercises sovereignty or sovereign rights and jurisdiction, in accordance with its domestic law and international law.

Article 2: General Provisions

1. Recognizing the sovereign right of each Party to establish its own levels of domestic environmental protection and its environmental development policies and priorities, and to adopt or modify accordingly its environmental laws and policies, each Party shall ensure that its environmental laws and policies provide for high levels of environmental protection and shall strive to continue to develop and improve those laws and policies.
2. Accordingly, and with the aim of achieving high levels of environmental protection, each Party shall effectively enforce, through government action, its environmental laws.
3. For the purpose of this Agreement, a Party has not failed to effectively enforce its environmental law in a particular case where the action or inaction in question by agencies or officials of that Party:
 - (a) reflects a reasonable exercise of their discretion in respect of investigatory, prosecutorial, regulatory or compliance matters; or
 - (b) results from bona fide decisions to allocate resources to enforcement in respect of other environmental matters determined to have higher priorities.

4. Neither Party shall encourage trade or investment by weakening or reducing the levels of protection afforded in its environmental laws. Accordingly, neither Party shall waive or otherwise derogate from environmental laws in a manner that weakens or reduces the protections afforded in those laws to encourage trade or investment.
5. Each Party shall ensure that it maintains appropriate procedures for assessing the environmental impacts in accordance with domestic law and policy of proposed plans and projects, which may cause adverse effects on the environment, with a view to avoiding or minimizing such adverse effects.
6. The Parties shall encourage the promotion of the trade and investment of environmental goods and services.
7. Nothing in this Agreement shall be construed to empower a Party's authorities to undertake environmental law enforcement activities in the territory of the other Party.
8. The Parties affirm the importance of the *Convention on Biological Diversity*, done at Rio de Janeiro on 5 June, 1992 ("Convention on Biological Diversity"), and agree to work together to advance the objectives of that Convention.
9. Nothing in this Agreement shall be construed to affect the existing rights and obligations of either Party under other international environmental agreements to which such Party is a party.

Article 3: Availability of Proceedings and Procedural Standards

1. Each Party shall ensure that judicial, quasi-judicial or administrative enforcement proceedings are available to provide sanctions or remedies for violations of its environmental law.
2. Each Party shall ensure that interested persons residing in or established in the territory of such Party may request the Party's competent authorities to investigate alleged violations of its environmental law and shall give such requests due consideration, in accordance with its law.
3. Each Party shall ensure that persons with a legally recognized interest under its law in a particular matter covered by this Agreement shall have appropriate access to judicial, quasi-judicial and administrative proceedings for the enforcement of the Party's environmental law, and to remedies for violations of that law.
4. Each Party shall ensure that the proceedings in paragraphs 1 and 3 of Article 3 are fair, equitable and transparent, comply with due process of law and are open to the public, except where the administration of justice otherwise requires.
5. Each Party shall ensure that the parties to the proceedings are entitled to support or defend their respective positions and to present information or evidence, and that the decision is based on such information or evidence.
6. Each Party shall ensure that the final decisions on the merits in such proceedings are in writing, preferably state the reasons on which the decisions are based, and, without undue delay, are made available to the parties to the proceedings and in accordance with its law to the public.

7. Each Party shall further provide, as appropriate, that parties to such proceedings have the right, in accordance with its law, to seek, where warranted review and correction or redetermination, of final decisions in such proceedings.
8. Each Party shall ensure that tribunals that conduct or review such proceedings are impartial and independent, and do not have any substantial interest in the outcome of the matter.

Article 4: Public Information and Participation

1. Each Party shall promote public awareness of its environmental laws and policies by ensuring that information is available to the public regarding its environmental laws and policies, compliance and enforcement and procedures for interested persons to request a Party's competent authorities to investigate alleged violations of its environmental laws.
2. Each Party shall ensure that its laws, regulations, and administrative rulings of general application respecting any matter covered by this Agreement are promptly published or otherwise made available in such a manner so as to enable interested persons to become acquainted with them.
3. In accordance with domestic law and policy, each Party shall ensure that its environmental assessment procedures provide for the disclosure of information to the public concerning proposed plans and projects subject to assessment and shall allow for public participation in such procedures.
4. Any person residing in or established in the territory of either Party may submit a written question to either Party, through its National Coordinating

Officer, indicating that the question is being submitted regarding that Party's obligations pursuant to this Agreement. Such National Coordinating Officer shall receive, record and, when the question is directed to the other Party, send the question to the other National Coordinating Officer.

5. The Party to which such question is directed shall acknowledge the question in writing, and provide a response in a timely manner to the person and provide a copy to the National Coordinating Officer of the other Party.
6. Each Party shall make publicly available in a timely manner all questions and responses and shall report on an annual basis with respect to those questions and responses.
7. The Parties shall inform the public of activities, including meetings of the Parties and cooperative activities, undertaken to implement this Agreement.
8. The Parties shall endeavour to engage the public in activities undertaken to implement this Agreement.
9. The Parties shall strive to cooperate to strengthen public participation in all matters related to the implementation of this Agreement.

Article 5: Biological Diversity

1. The Parties recognize the importance of the conservation and sustainable use of biological diversity in achieving sustainable development and reiterate their commitment to promote the conservation and sustainable use of biological diversity.

2. The Parties also reiterate their commitment, as established by the *Convention on Biological Diversity*, to respect, preserve and maintain traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities that contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity, subject to national legislation.
3. The Parties reiterate their sovereign rights over their natural resources and recognize their authority and obligations as established by the *Convention on Biological Diversity* with respect to access to genetic resources, and to the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of those genetic resources.
4. The Parties also recognize the importance of public participation and consultation, as provided by domestic law, on matters concerning the conservation and sustainable use of biological diversity.
5. The Parties agree to cooperate on the conservation and sustainable use of biological diversity within the framework provided by Section II of this Agreement.
6. The Parties shall endeavour to cooperate in order to exchange relevant information regarding:

 - (a) the conservation and sustainable use of biodiversity;
 - (b) the avoidance of illegal access to genetic resources, traditional knowledge, innovations and practices; and

- (c) the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and associated knowledge, innovations and practices.

Article 6: Corporate Social Responsibility

Recognizing the substantial benefits brought by international trade and investment, the Parties shall encourage voluntary best practices of corporate social responsibility by enterprises within their territories or jurisdictions, to strengthen coherence between economic and environment objectives.

Section II - Environmental Cooperation

Article 7: Cooperation

1. The Parties recognize that cooperation is an effective way to achieve the objectives of this Agreement and reaffirm their commitment to developing cooperation programs and activities to promote the achievement of these objectives.
2. The Parties agree to strive to strengthen their cooperation on environmental issues in other bilateral, regional and multilateral fora in which they participate.
3. In developing cooperation programs, the Parties may involve the public and interested stakeholders or any other entity as the Parties deem appropriate.

4. The Parties agree to identify priority areas for cooperative activities and to establish a work program which shall be prepared forthwith after the entry into force of this Agreement. The priority areas listed in Annex I to this Agreement shall be taken into account for the initial Work Program.

5. The Parties agree to make best efforts to find appropriate resources to effectively implement a Work Program. The Work Program could be implemented:

- (a) through technical cooperation programmes under any modality decided by the Parties, including information sharing, exchange of experts and training; and/or
- (b) through financial cooperation for priority projects presented by the Parties.

The resources could come from, inter alia, public entities or agencies from the Parties, or when appropriate, from private institutions, foundations or international public organizations.

6. The Parties may cooperate with any State not party to this Agreement, where appropriate, to maximize available resources. Where appropriate, the Parties agree to cooperate to identify and to secure resources from external sources.

7. The Parties agree that the public should be informed of cooperative activities undertaken under this Agreement and engaged, as appropriate.

8. The Parties shall meet no later than one year after the entry into force of this Agreement and subsequently as agreed to review progress on cooperative activities. Such meetings shall be organized by the National Coordinating Officers.

Section III - Institutional Provisions

Article 8: Management of the Agreement

1. The Parties hereby establish a Committee on the Environment, comprising representatives of each Party.

2. The Committee shall consider and discuss progress on the implementation of this Agreement.

3. The Committee shall meet, for the first time, no later than one year following the entry into force of this Agreement and subsequently as mutually agreed.

4. The Committee shall prepare a summary record of the meetings unless otherwise agreed and shall prepare reports on the activities related to the implementation of this Agreement when they consider appropriate. Such reports may address, among other things:

- (a) Actions taken by each Party further to its obligations pursuant to this Agreement; and
- (b) Cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement.

5. Summary records and reports shall be made public, unless otherwise agreed by the Parties.

Article 9: National Coordinating Officer

Each Party shall designate a National Coordinating Officer within the appropriate agency/ministry that shall serve as the official point of contact. The Parties shall inform each other by diplomatic note of such designation and shall make such information available to the public.

Article 10: Review

1. No later than the fifth year after the date of its entry into force, the Committee shall consider undertaking a major review of the Agreement with a view to improving its operation and effectiveness. Further reviews may be agreed to by the Parties.
2. The Committee may provide for the participation of the public in the review process.
3. As part of this review, the Committee may consider further developments in respect of this Agreement and may present recommendations to the Parties for their consideration and action as appropriate.
4. The Parties shall make the results of any major review public.

Article 11: Information Exchange

A Party shall promptly provide any information regarding any environmental measure to the other Party, upon receiving a written request from that other Party.

Article 12: Dispute Resolution

1. The Parties shall at all times endeavour to agree on the interpretation and application of this Agreement.
2. The Parties shall make every attempt, through consultations and the exchange of information with an emphasis on cooperation to address any matter that might affect the interpretation and application of this Agreement.
3. Either Party may request consultations with the other Party regarding any matter arising under this Agreement by delivering a written request to the National Coordinating Officers that the other Party has designated.
4. If the Parties fail to resolve the matter through the National Coordinating Officers, a Party may request in writing consultations to be carried out by:
 - (a) For Canada, the Minister of the Environment;
 - (b) For the Republic of Peru, the Minister of the Environment;or their delegates/successors.

The purpose of the consultations shall be to seek a mutually agreed solution to the matter.

5. The Party that is the object of the request shall respond expeditiously. The consultations shall begin within thirty days after the receipt of the written request, unless the Parties agree otherwise.

6. Neither Party may provide for a right of action under its law against the other Party on the ground that the other Party has acted in a manner inconsistent with this Agreement.

Article 13: Application to the Provinces

The application of this Agreement to the provinces of Canada is subject to Annex II.

Article 14: Annexes

The Annexes to this Agreement form an integral part of this Agreement.

Article 15: Protection of Information

Nothing in this Agreement shall be construed to require a Party to release information that would be otherwise prohibited or exempt from disclosure under its laws and regulations, including those concerning access to information and privacy.

Article 16: Amendments

The Parties may agree in writing on any amendment or addition to this Agreement including its Annexes. Such amendment or addition shall come into force on such date or dates as may be agreed between the Parties and shall constitute an integral part of this Agreement.

Article 17: Termination

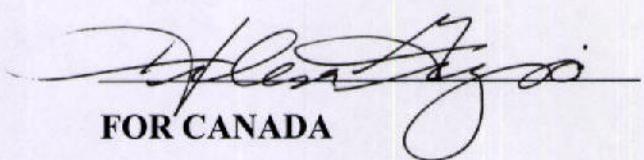
1. This Agreement may terminate upon the mutual written consent of the Parties and upon such conditions and within such timeframes as may be mutually agreed upon.
2. In the event of the termination of the *Free Trade Agreement between Canada and the Republic of Peru* either Party may unilaterally, with 60 days written notice to the other Party, terminate this Agreement.

Article 18: Entry into Force

Each Party shall notify the other Party in writing of the completion of the domestic procedures required for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force from the date of the second of these notifications or the date that the *Free Trade Agreement between Canada and the Republic of Peru* enters into force, whichever is later.

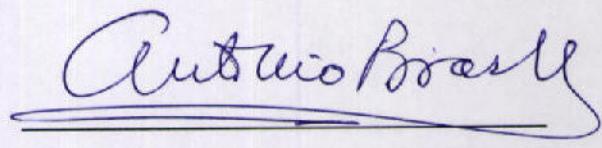
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Lima, this 29th day of May, 2008, in the English, French and Spanish languages, each version being equally authentic.



Stephen Harper

FOR CANADA



Antonio Brack

FOR THE REPUBLIC OF PERU

Annex I

Priority Areas for Cooperation

The priority areas identified by the Republic of Peru for consideration in the initial Work Program include, among others:

- (a) Environmental risk management;
- (b) Integrated water management;
- (c) Conservation *in situ* and *ex situ* of biodiversity;
- (d) Sustainable use of natural resources;
- (e) Restoration of degraded ecosystems;
- (f) Promotion of production and trade of environmental-friendly goods and services;
- (g) Air, soil and waters pollution prevention management and control;
- (h) Integrated solid waste management;
- (i) Integrated chemical contaminants and hazardous wastes management;
- (j) Systematizing of environmental information;
- (k) Environmental citizenship and education;

- (l) National institutional strengthening including:
 - (i) surveillance program of living natural resources;
 - (ii) Information system of living natural resources;
 - (iii) Information system on the environment;
 - (iv) Surveillance program for the monitoring and tracking of genetic resources;
 - (v) Monitoring and alert system of genetically modified organisms;
- m) Harmonization and rationalization of the knowledge and information management, including coastal desert ecosystems and Andean grassland ecosystems;
- n) Forests management; and
- o) Use and development of clean technologies.

Annex II

Application to the Provinces of Canada

1. Following the entry into force of this Agreement, Canada shall provide to the Republic of Peru a written declaration indicating any provinces for which Canada is to be bound in respect of matters within their jurisdiction. The declaration shall be effective on delivery to the Republic of Peru.
2. Canada shall use its best efforts to make this Agreement applicable to as many provinces as possible.
3. Canada shall notify the Republic of Peru six months in advance of any modification to its declaration.

ACCORD SUR L'ENVIRONNEMENT

ENTRE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après désignés comme les « Parties »,

RAPPELANT leur résolution, énoncée dans l'*Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou*, d'appliquer ledit accord de manière à assurer la protection et la conservation de l'environnement ainsi que l'utilisation durable de leurs ressources, et, plus précisément :

- a) de renforcer et de mettre en application les lois et les règlements concernant l'environnement;
- b) d'accroître la coopération en matière d'environnement;
- c) de favoriser le développement durable;

CONVAINCUS de l'importance d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration de l'environnement sur leurs territoires, ainsi que du rôle essentiel de la coopération dans ces domaines aux fins d'un développement durable propre à garantir le bien-être des générations présentes et futures;

RECONNAISSANT les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent leurs pays grâce à l'établissement d'une zone de libre-échange;

RAPPELANT l'engagement des Parties de mettre en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l'environnement;

RECONNAISSANT l'importance de la transparence et de la participation publique dans l'élaboration des lois et politiques environnementales ainsi qu'au regard de la gouvernance environnementale;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Section I – Droits et obligations en matière d'environnement

Article 1 : Définitions

Aux fins du présent accord :

« **droit de l'environnement** » s'entend de toute loi ou règlement d'une Partie ou d'une disposition de ces lois ou règlements, y compris les instruments ayant force obligatoire pris en vertu de ceux-ci, dont l'objet premier est la protection de l'environnement ou la prévention d'un danger pour la santé ou la vie des personnes par :

- a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission de polluants ou de contaminants de l'environnement; ou
- b) le contrôle des produits chimiques, substances, matières et déchets toxiques ou dangereux pour l'environnement, et la diffusion d'information à ce sujet; ou
- c) la conservation de la diversité biologique, y compris la protection de la flore et de la faune sauvages, des espèces menacées et de leur habitat, et des zones naturelles spécialement protégées sur le territoire de la Partie et, pour la République du Pérou, incluant également l'utilisation durable de la diversité biologique;

à l'exclusion des lois ou règlements, ou de toute disposition de ceux-ci, concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs et la santé publique.

Il est entendu que le terme « droit de l'environnement » n'inclut pas les lois ou règlements, ou les dispositions des lois ou règlements, dont l'objet premier est la gestion de la récolte ou de l'exploitation commerciale, de la récolte de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones, de ressources naturelles;

« collectivités autochtones et collectivités locales » s'entend, pour la République du Pérou, des collectivités autochtones et afro-américaines et des collectivités locales définies à l'article 1 de la Décision 391 de la Communauté andine comme un groupe d'humains dont les conditions sociales, culturelles et économiques le distinguent des autres groupes de la collectivité nationale, qui est régi entièrement ou partiellement par ses propres coutumes ou traditions ou par une législation particulière et qui, nonobstant sa situation juridique, conserve en tout ou en partie ses institutions sociales, économiques, culturelles et politiques;

« **personne** » s'entend d'une personne physique, ou d'une personne morale, telle qu'une entreprise ou une organisation non gouvernementale, constituée en vertu des lois d'une Partie;

« **province** » s'entend d'une province du Canada ainsi que du Territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

« **loi** » ou « **règlement** » s'entend :

- a) dans le cas du Canada : une loi ou un règlement ou une disposition de ces lois et règlements, y compris les instruments juridiquement contraignants conclus en fonction desdites lois et règlements, promulgués, faits ou émis par le gouvernement fédéral et par toute province listée dans une déclaration du Canada en accord avec l'Annexe II;
- b) dans le cas de la République du Pérou : une loi du Congrès ou un décret ou une résolution promulgués par le niveau central de gouvernement en vue de l'adoption d'une loi du Congrès, susceptible d'exécution par initiative du niveau central de gouvernement;

« **territoire** » s'entend :

- a) dans le cas du Canada,
 - i) du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et des eaux territoriales;

- ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle que définie par la législation interne du pays, en conformité avec la Partie V de la *Convention des Nations Unies sur le droit de la mer* du 10 décembre 1982 (UNCLOS);
 - iii) du plateau continental du Canada, tel que défini par la législation interne du pays, en conformité avec la Partie VI de l'UNCLOS;
- b) dans le cas de la République du Pérou, le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l'espace aérien surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou une compétence et des droits souverains conformément à son droit interne et en harmonie avec le droit international.

Article 2 : Dispositions générales

1. Reconnaissant le droit souverain de chacune des Parties d'établir ses propres niveaux internes de protection de l'environnement et ses propres politiques et priorités de mise en valeur de celui-ci, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses propres lois et politiques en matière d'environnement, chacune des Parties s'assure que ses lois et politiques en matière d'environnement prévoient de hauts niveaux de protection de l'environnement, et s'efforce de continuer à développer et à améliorer ces lois et politiques.
2. Par conséquent, afin d'atteindre de hauts niveaux de protection de l'environnement, chacune des Parties veille, au moyen de mesures gouvernementales, à appliquer efficacement ses lois environnementales.

3. Aux fins du présent accord, une Partie n'a pas manqué d'assurer l'application effective de son droit de l'environnement dans le cas particulier où l'action ou l'omission en cause de ses organismes ou de ses fonctionnaires :

- a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou le contrôle de l'observation; ou
- b) résulte de la décision, prise de bonne foi, d'affecter des ressources à des mesures d'application relatives à d'autres questions environnementales considérées comme ayant un rang de priorité plus élevé.

4. Aucune des deux Parties n'encourage le commerce ou l'investissement par l'affaiblissement ou la diminution du niveau de protection qu'elles accordent dans leurs lois respectives en matière d'environnement. En conséquence, aucune des Parties ne renonce ou ne déroge, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement, aux dispositions de leur droit environnemental d'une manière qui affaiblit ou qui diminue les protections reconnues dans ces dispositions.

5. Chacune des Parties s'assure de maintenir les procédures appropriées pour évaluer, au regard du droit et des politiques internes, les incidences environnementales de plans et de projets qui sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, afin d'éviter ou de réduire au minimum ces incidences défavorables.

6. Les Parties encouragent la promotion du commerce et de l'investissement portant sur des biens et services environnementaux.

7. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de conférer aux autorités d'une Partie le pouvoir d'exercer des activités d'application de dispositions environnementales sur le territoire de l'autre Partie.
8. Les Parties attestent l'importance de la *Convention sur la diversité biologique*, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 (« Convention sur la biodiversité ») et conviennent de travailler collectivement à l'avancement des objectifs de cette Convention.
9. Le présent accord n'a pas pour effet de modifier les droits et obligations découlant pour les Parties des autres accords environnementaux internationaux auxquels elles sont parties.

Article 3 : Mise à disposition de recours et de normes procédurales

1. Chacune des Parties s'assure de donner accès à des mécanismes d'exécution judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs visant à sanctionner ou à corriger les infractions à son droit de l'environnement.
2. Chacune des Parties s'assure que les personnes intéressées qui résident sur son territoire ou qui y sont établies, puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des infractions alléguées à son droit de l'environnement, et accorde l'attention nécessaire à de telles demandes, en conformité avec ses règles de droit.
3. Chacune des Parties s'assure que les personnes ayant dans une affaire déterminée relevant du présent accord un intérêt reconnu par sa législation, aient la possibilité voulue d'engager des procédures judiciaires, quasi judiciaires et

administratives en vue d'assurer l'application du droit de l'environnement de la Partie, et de réclamer réparation des violations du droit de la Partie en la matière.

4. Chacune des Parties s'assure que les procédures visées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 3 soient justes, équitables et transparentes, qu'elles respectent le principe d'application régulière de la loi et qu'elles soient publiques, sauf lorsque la bonne administration de la justice exige le huis clos.

5. Chacune des Parties s'assure que les parties à une affaire aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou autres informations, et que la décision soit fondée sur ces éléments de preuve ou autres informations.

6. Chacune des Parties s'assure que les décisions finales sur le fond rendues dans de telles procédures soient mises par écrit, motivées de préférence, et que, sans retard injustifié, elles soient communiquées aux parties aux procédures et publiées conformément à sa législation.

7. Chacune des Parties s'assure également, s'il y a lieu, que les parties aux procédures aient le droit, conformément aux dispositions de sa législation, de demander, dans les cas qui le justifient, l'examen et la réformation des décisions finales rendues dans de telles procédures.

8. Chacune des Parties s'assure que les tribunaux chargés de l'examen ou de la révision de telles procédures soient impartiaux et indépendants et n'aient aucun intérêt marqué dans l'issue de l'affaire.

Article 4 : Information et participation du public

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public à ses lois et politiques en matière d'environnement en s'assurant que le public ait accès à de l'information concernant ses lois et politiques en ce domaine, les mesures d'observation et d'application et la procédure par laquelle les personnes intéressées peuvent demander aux autorités compétentes d'une Partie d'enquêter sur des violations alléguées à ses dispositions législatives en matière d'environnement.
2. Chacune des Parties s'assure que ses lois, règlements et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d'une autre manière, de telle sorte que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.
3. Conformément au droit et politiques internes, chacune des Parties s'assure que ses procédures d'évaluation environnementale prévoient la publication des renseignements relatifs aux plans et projets soumis à évaluation et permet au public de participer à ces procédures.
4. Toute personne résidant ou établie sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties peut présenter une question écrite à l'une ou l'autre Partie, par l'intermédiaire de son agent coordonnateur national, en précisant que la question soumise touche les obligations de ladite Partie découlant du présent accord. L'agent coordonnateur national reçoit et enregistre et, lorsque la question est adressée à l'autre Partie, l'envoie à l'agent coordonnateur de l'autre Partie.

5. La Partie à qui la question est posée en accuse réception par écrit et répond en temps opportun à la personne qui a présenté la question, avec copie à l'agent coordonnateur national de l'autre Partie.
6. Chacune des Parties mettra à la disposition du public, en temps opportun, toutes les questions et réponses et présente un compte rendu annuel sur ces questions et réponses.
7. Les Parties informent le public des activités entreprises pour assurer la mise en œuvre du présent accord, y compris les réunions des Parties et les activités de coopération.
8. Les Parties s'efforcent de faire participer le public dans les activités entreprises pour la mise en œuvre du présent accord.
9. Les Parties s'appliquent à coopérer afin d'accroître la participation du public dans toute question liée à la mise en œuvre du présent accord.

Article 5 : Diversité biologique

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique pour le succès du développement durable et réitèrent leur engagement à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
2. Les Parties réitèrent aussi leur engagement, énoncé dans la *Convention sur la diversité biologique*, de respecter, préserver et maintenir le savoir traditionnel, les innovations et les pratiques des collectivités autochtones et des collectivités

locales qui contribuent à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, sous réserve de la législation nationale.

3. Les Parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles et reconnaissent leur compétence et leurs obligations aux termes de la *Convention sur la diversité biologique* relativement à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation de ces ressources génétiques.

4. Les Parties reconnaissent également l'importance de la participation et de la consultation du public, en conformité avec le droit interne, sur des questions afférentes à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique.

5. Les Parties conviennent de coopérer, ainsi qu'il est prévu dans la section II du présent accord, à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique.

6. Les Parties s'efforcent de coopérer à l'échange de renseignements pertinents concernant :

- a) la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;
- b) la prévention de tout accès illégal aux ressources génétiques, au savoir traditionnel, aux innovations et aux pratiques;
- c) le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et du savoir des innovations et des pratiques qui y sont associés.

Article 6 : Responsabilité sociale des entreprises

Reconnaissant les avantages substantiels que procurent le commerce et l'investissement internationaux, les Parties encouragent les meilleures pratiques de responsabilité sociale des entreprises sur leur territoire ou relevant de leur compétence, pour renforcer la cohésion des objectifs économiques et environnementaux.

Section II – Coopération en matière d'environnement

Article 7 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent que la coopération constitue un moyen efficace de réaliser les objectifs du présent accord et réaffirment leur résolution à élaborer des programmes et activités de coopération visant à promouvoir la réalisation de ces objectifs.
2. Les Parties conviennent de chercher à affirmer leur coopération sur des questions d'environnement au sein d'autres assemblées bilatérales, régionales et multilatérales auxquelles elles participent.
3. Pour élaborer des programmes de coopération, les Parties peuvent faire appel à la participation du public, d'intervenants intéressés ou de toute autre entité que les Parties considèrent appropriée.
4. Les Parties conviennent de déterminer des domaines prioritaires d'activités de coopération et d'établir un programme de travail, préparé immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord. Il sera tenu compte, dans l'élaboration du

programme de travail initial, des domaines de coopération prioritaires énumérés à l'annexe I du présent accord.

5. Les Parties conviennent de ne ménager aucun effort pour trouver les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective d'un programme de travail. La mise en œuvre du programme de travail pourrait s'effectuer notamment :

- a) grâce à des programmes de coopération technique dont les Parties établiraient les modalités, y compris l'échange d'information, l'échange d'experts et la formation;
- b) par une coopération financière pour les projets prioritaires présentés par les Parties.

Les ressources pourraient provenir, entre autres, d'entités ou organismes publics des Parties ou, dans les cas appropriés, d'institutions privées, de fondations ou d'organisations publiques internationales.

6. Les Parties peuvent coopérer, le cas échéant, avec un État qui n'est partie prenante au présent accord, afin de maximiser les ressources disponibles. Elles conviennent de coopérer entre elles, s'il y a lieu, afin de mobiliser des ressources provenant de sources externes.

7. Les Parties conviennent que le public devrait être informé des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord et invité à y prendre part, s'il y a lieu.

8. Les Parties se réunissent au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon le calendrier dont elles auront convenu pour

l'examen des progrès réalisés relativement aux activités de coopération. L'organisation de ces réunions incombe aux agents coordonnateurs nationaux.

Section III – Dispositions institutionnelles

Article 8 : Gestion de l'accord

1. Les Parties établissent par les présentes un Comité sur l'environnement, formé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Comité examine et analyse les progrès de la mise en œuvre du présent accord.
3. Le Comité se réunit au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon ce que les Parties ont décidé d'un commun accord.
4. Le Comité prépare un compte rendu sommaire des réunions, à moins de convention contraire, et prépare des rapports sur les activités liées à la mise en œuvre du présent accord lorsqu'il le jugera opportun. Ces rapports peuvent traiter notamment des éléments suivants :
 - a) les mesures prises par chacune des Parties pour donner suite à ses obligations en vertu du présent accord;
 - b) les activités de coopération entreprises en vertu du présent accord.
5. Les comptes rendus sommaires et les rapports sont publiés, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article 9 : Agent coordonnateur national

Chacune des Parties désigne, au sein de l'organisme ou du ministère pertinent, un agent coordonnateur national qui servira de point de contact officiel. Les Parties s'informent mutuellement par note diplomatique de cette désignation dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord, et rendent publique cette information.

Article 10 : Examen

1. Au plus tard la cinquième année suivant la date de son entrée en vigueur, le Comité examine l'opportunité de procéder à une révision en profondeur du présent accord dans le but d'en améliorer le fonctionnement et l'efficacité. Les Parties pourront convenir de procéder à des examens ultérieurs.
2. Le Comité pourra prévoir la participation du public dans le processus d'examen.
3. Dans le cadre de cet examen, le Comité pourra examiner d'autres initiatives relatives au présent accord et présenter des recommandations aux Parties, afin que celles-ci les étudient et prennent les dispositions qui conviennent, selon le cas.
4. Les Parties font connaître au public les résultats de tout examen important.

Article 11 : Échange d'information

Une Partie fournit rapidement à l'autre Partie toute information concernant une mesure de nature environnementale, après avoir reçu une demande écrite à cet effet de cette autre Partie.

Article 12 : Règlement des différends

1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord.
 2. Les Parties font tout leur possible pour régler, au moyen de la consultation et de l'échange d'information et en accordant une attention particulière à la coopération, tout problème qui pourrait nuire à l'interprétation et à l'application du présent accord.
 3. Chaque Partie pourra demander de consulter l'autre Partie au sujet de tout problème découlant du présent accord, en présentant une demande écrite aux agents coordonnateurs nationaux désignés par l'autre Partie.
 4. Si les Parties ne peuvent résoudre le problème par l'intermédiaire des agents coordonnateurs nationaux, une Partie peut présenter une demande écrite pour que les consultations soient tenues :
 - a) pour ce qui est du Canada, par le ministre de l'Environnement;
 - b) pour ce qui est de la République du Pérou, par le ministre de l'Environnement;
- ou par leurs délégués ou successeurs.

Les consultations ont pour but de parvenir à une solution mutuellement convenue au problème.

5. La Partie visée par la demande y répond sans retard. Les consultations débutent dans les trente jours suivant la réception de la demande écrite, à moins que les Parties ne conviennent d'un autre délai.

6. Aucune des deux Parties ne peut prévoir, dans sa législation, un droit d'action contre l'autre Partie fondé sur une violation du présent accord par cette dernière.

Article 13 : Application aux provinces

L'application du présent accord aux provinces du Canada est subordonnée à l'annexe II.

Article 14 : Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 15 : Protection des renseignements

Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à divulguer des renseignements qui seraient autrement interdits ou exemptés de divulgation selon sa législation et sa réglementation, notamment suivant les dispositions concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

Article 16 : Amendements

Les Parties pourront convenir par écrit de tout amendement ou adjonction au présent accord, y compris à ses annexes. Un tel amendement ou adjonction entre en vigueur à la date ou aux dates dont les Parties auront convenu et fait partie intégrante du présent accord.

Article 17 : Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé si les deux Parties y consentent par écrit, sous réserve des modalités et dans les délais dont les Parties ont convenu d'un commun accord.
2. En cas de dénonciation de *l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou*, l'une ou l'autre Partie peut unilatéralement, en donnant un préavis écrit de 60 jours à l'autre Partie, dénoncer le présent accord.

Article 18 : Entrée en vigueur

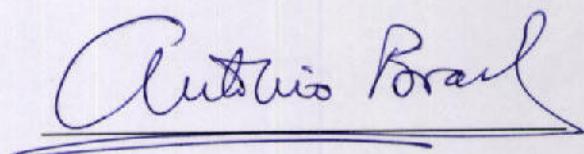
Chacune des Parties notifie l'autre Partie par écrit de l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications ou à la date de l'entrée en vigueur de *l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou*, selon la date la plus tardive.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à Lima ce 29 jour de mai 2008 en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

**POUR
LE CANADA**

**POUR
LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU**



Antonio Brail

Annexe I

Domaines prioritaires de coopération

Les domaines prioritaires que la République du Pérou a désignés en vue de l'élaboration du plan de travail initial incluent entre autres :

- a) gestion du risque en matière d'environnement;
- b) gestion intégrée des eaux;
- c) conservation *in situ* et *ex situ* de la biodiversité;
- d) utilisation durable des ressources naturelles;
- e) restauration des écosystèmes dégradés;
- f) promotion de la production et du commerce de biens et services qui respectent l'environnement;
- g) prévention, gestion et contrôle de la contamination des eaux, de l'atmosphère et des sols;
- h) gestion intégrée des déchets solides;
- i) gestion intégrée des contaminants chimiques et des déchets dangereux;
- j) systématisation de l'information en matière d'environnement;

- k) civisme et sensibilisation à l'égard de l'environnement;
- l) renforcement national des institutions, notamment par :
 - (i) un programme de surveillance des ressources naturelles vivantes;
 - (ii) un système d'information sur les ressources naturelles vivantes;
 - (iii) un système d'information sur l'environnement;
 - (iv) un programme de surveillance pour l'examen et le suivi des ressources génétiques;
 - (v) un système de surveillance et d'alerte relatif aux organismes génétiquement modifiés;
- m) harmonisation et rationalisation de la gestion des connaissances et de l'information, y compris les écosystèmes côtiers des déserts et les écosystèmes des pâturages andins;
- n) gestion des forêts;
- o) utilisation et développement des technologies propres.

Annexe II

Application aux provinces du Canada

1. À la suite de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada communique à la République du Pérou une déclaration écrite énumérant les provinces à l'égard desquelles le Canada sera lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. Cette déclaration prend effet au moment de sa signification à la République du Pérou.
2. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent accord applicable au plus grand nombre possible de provinces.
3. Le Canada notifie à la République du Pérou, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.

